



# INFORME DE MONITOREO DE PROTECCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 2023



**Mdh. Raquel Caballero de Guevara**  
**Procuradora para la Defensa de los**  
**Derechos Humanos**

**Caracterización del desplazamiento  
forzado interno en la población víctima**

**Acceso a derechos de la población en  
condición de desplazamiento forzado**

**Deber de garantía del Estado**



## CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
GLOSARIO.....	6
ANTECEDENTES.....	7
METODOLOGÍA.....	9
GENERALIDADES DEL MONITOREO DE PROTECCIÓN A DFI 2023.....	10
RESULTADOS DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 2023.....	11
CARACTERIZACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN LA POBLACIÓN VÍCTIMA .....	11
Motivo del Desplazamiento Forzado Interno.....	12
Área de la población víctima .....	14
Pérdida de medios de subsistencia .....	15
Características de los Núcleos Familiares Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno.....	16
Afectaciones dentro de los Núcleos Familiares.....	17
ACCESO A DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO.....	19
BARRERAS DE TIPO LEGAL .....	19
BARRERAS DE RESPUESTA INSTITUCIONAL.....	19
BARRERA DE ACCESO A DERECHOS .....	21
BARRERA POR TIPO DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD .....	24
LIMITANTES EN LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DFI.....	26
DEBER DE GARANTÍA DEL ESTADO .....	28
LINEAS DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO DE PROTECCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2023.....	29
Monitoreo de protección.....	30
Difusión y capacitación sobre DFI a nivel territorial.....	30
Participación en espacios interinstitucionales a nivel local .....	31
Fortalecimiento de capacidades internas al personal de la PDDH en Delegaciones Departamentales.....	32
OTROS HALLAZGOS.....	32
CONCLUSIONES.....	34
RECOMENDACIONES.....	35
A los Órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial .....	35
Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).....	36
A la Policía Nacional Civil.....	36
A la Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República.....	37
Al CONAPINA e Instituto CRECER JUNTOS.....	37
Al Ministerio de Trabajo, INCAF y CONAMYPE.....	38
MINEDUCYT.....	38
Ministerio de Salud.....	38
Alcaldías municipales.....	39
Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISDEMU.....	39
AL MJSP, PNC, PGR, FGR, CONAPINA, MTPS, MINSAL, MINEDUCYT E ISDEMU.....	39
Organizaciones no gubernamentales .....	40
CREDITOS Y AGRADECIMIENTOS .....	41
ANEXOS.....	42
Anexo 1. Instituciones consultadas en el ejercicio del monitoreo de protección a personas víctimas de DFI, 2023.....	42

## RESUMEN EJECUTIVO.

La ejecución de la Estrategia de Monitoreo de Protección a Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos busca la caracterización del fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno (en adelante DFI), identificación de las barreras de acceso a derechos, barreras por tipo de población en condición de vulnerabilidad, conocer las limitantes en la capacidad de afrontamiento y describir el cumplimiento del deber de garantía del Estado.

Se entenderá por población víctima de DFI a toda aquella persona que se ha visto forzada u obligada a huir de su domicilio o de su lugar de residencia habitual o en riesgo de serlo, como resultado o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida, conforme a la definición establecida en el art. 3, de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno (en adelante Ley DFI).

En consecuencia, se presenta el Informe Anual de Resultados del Monitoreo de Protección año 2023 realizado en los departamentos de Sonsonate, San Vicente y San Miguel, resultante de la implementación de dos instrumentos de captación de información: encuesta a población general y entrevista con actores locales (representantes de instituciones estatales, ONG's y organizaciones comunitarias).

Se recopilaron los datos de cuatro fases de levantamiento de información, comprendidas entre los meses de febrero a octubre, se realizaron 1,886 encuestas a población en general y 50 entrevistas con referentes institucionales y comunitarios, obteniéndose los siguientes resultados: se identificaron 254 casos de población víctima de DFI entre población que ha sido desplazada o en riesgo a desplazamiento, en algunos casos los hechos de violencia que ocasionaron los desplazamientos forzados pueden corresponder a años anteriores.

En la caracterización de la población víctima de DFI: de los 254 casos, que representan un 14% del total de personas encuestadas, 234 ya han sido desplazados y 20 se encuentran en riesgo de desplazarse; también se identifican a 926 personas que conforman sus núcleos familiares.

En cuanto a las modalidades de desplazamiento se identificó que: el 50% fue familiar y 50% individual, un 39% de los miembros de los núcleos familiares se quedaron en sus lugares de origen. Además, que el 85% de las víctimas que sufrieron directamente los hechos de violencia están en los rangos de edades de 18 a 59 años.

Se puede establecer que las principales causas que originaron el DFI fueron: un 41% las amenazas, 25% la extorsión, 9% la agresión física, 7% asesinato de un familiar, 4% acoso y un 3% a violencia basada en género.

La población víctima mencionó que los principales actores de los hechos de violencia que provocaron el DFI son: 84% pandillas, 7% parejas sentimentales, 4% familiares y 3% PNC; el 79% de las víctimas dijo no haber realizado denuncia ante alguna autoridad competente, por motivos como el miedo a represalias 58%, falta de confianza en las instituciones 30% y un 10% por no saber a dónde acudir.

Entre las principales afectaciones identificadas, el 41% se refieren a las de tipo psicológicas y la separación familiar. El 92% de la población víctima expresó no haber recibido ningún tipo de apoyo de instituciones estatales, además de no identificar que estas sean confiables y accesibles, dando lugar a que sus principales redes de apoyo han sido familiares y amistades cercanas.

Por otra parte, el 54% de los referentes institucionales consultados en las entrevistas no conocen o solo han escuchado sobre Ley DFI. A nivel territorial el mismo porcentaje de ellos afirman no contar con una ruta de atención o derivación ante casos de DFI.

En lo que respecta al deber de garantía del Estado, si bien desde el año 2020 en el país se cuenta con La Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de DFI, la cual es un avance en términos jurídicos y de reconocimiento para las víctimas, a 4 años de su aprobación aún no existe un reglamento de esta, que permita su operativización.

Durante el presente ejercicio se conoció que aún persisten retos que fueron identificados en el ejercicio 2022, como ejemplos, el poco conocimiento sobre DFI por parte de personal de instituciones y no contar con un presupuesto para la atención a víctimas.

En la implementación de las líneas de acción de la Estrategia del Monitoreo de Protección, para el ejercicio 2023 se realizaron 47 jornadas de formación a nivel territorial sobre DFI y derechos humanos, en donde participaron 1,156 personas de nueve municipios priorizados, para lo cual, se elaboró un plan de formación y sus cartas metodológicas; también se realizaron seis jornadas de fortalecimiento en DFI, con el personal técnico de las tres Delegaciones Departamentales de la PDDH.

Por otra parte, el Equipo de Monitoreo de Protección participó en 58 reuniones o actividades en diferentes espacios de socialización y articulación, con instituciones y organizaciones, como el Comité Municipal para la Prevención de la Violencia (CMPV), mesas sectoriales, foros de ONG's en los cuales, se dio a conocer la temática DFI, así como los resultados del Informe Anual del Monitoreo de Protección (MP) 2022. [Realizando cinco eventos de socialización a nivel nacional].

El monitoreo de protección busca proporcionar información relevante para la elaboración de herramientas específicas que coadyuven a las autoridades a mejorar los procesos de prevención y atención de las personas víctimas de DFI.

En cumplimiento del mandato constitucional de PDDH de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, mediante el presente informe comparten los principales resultados y recomendaciones del MP con la finalidad de que las instituciones del Estado y la sociedad salvadoreña cuente con insumos necesario para brindar una atención digna y oportuna en prevención, asistencia humanitaria, protección y soluciones duraderas a las víctimas del desplazamiento forzado interno.



## GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS.

AL	Actores Locales
CONAPINA	Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
DFI	Desplazamiento Forzado Interno.
DAPDM	Departamento de Atención a Personas Desplazadas y Personas Migrantes.
DAV	Dirección de Atención a Víctimas.
FGR	Fiscalía General de la República.
MINEDUCYT	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
MJSP	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
MP	Monitoreo de Protección.
MTPS	Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Ley DFI	Ley Especial para la Atención y Protección Integral de personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno.
OLAV	Oficina Local de Atención a Víctimas.
ONG	Organización No Gubernamental.
PDDH	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
PGR	Procuraduría General de la República.
PNC	Policía Nacional Civil.

## ANTECEDENTES.

El desplazamiento forzado interno surge a partir de la violencia en sus diferentes causas y modalidades, es un fenómeno que en El Salvador ha tenido una presencia e impacto constante a lo largo de la historia, presentando variantes basadas en los contextos del desarrollo sociopolítico y económico del país. La definición de persona en condición de desplazamiento forzado interno, se basa en el cumplimiento de tres características establecidas en la Ley DFI:

- ✓ Son todas aquellas personas que se han visto forzadas y obligadas a huir de sus domicilios de sus lugares de residencia habitual.
- ✓ En particular como resultado o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada y de violación de los derechos humanos.
- ✓ Que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Los resultados presentados en este informe se enmarcan puntualmente en el desplazamiento forzado interno por violencia generalizada, caracterizado por sus múltiples causas, procesos y afectaciones, que fundamentalmente han dado lugar a altos niveles de vulneración de derechos a nivel individual, familiar y comunitario, trascendiendo en la incapacidad de avanzar hacia una vida digna.

Con base en el artículo 194 de la Constitución de la República de El Salvador, que mandata a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a velar por el respeto y garantía a los derechos humanos, en el año 2014 esta institución visibilizó por primera vez el fenómeno del DFI en el país, generando una incidencia en favor del reconocimiento de las víctimas.

En el año 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia pronunciada en el proceso de Amparo 411-2017, declaró que en El Salvador existía un fenómeno de desplazamiento forzado interno. En dicho pronunciamiento se expuso los orígenes, afectaciones, vulneración sistemática a los derechos, la presencia y control de zonas geográficas por parte de las pandillas.

Uno de los principales avances jurídicos y de protección en materia de DFI a partir del Amparo 411-2017, es la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la “Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno”; no obstante, a la fecha aún existen retos importantes tales como:

- ✓ La elaboración del reglamento de Ley DFI.
- ✓ Una política pública, programas y proyectos.
- ✓ Divulgación de la ley sobre DFI.
- ✓ Asignación de un presupuesto.
- ✓ Un plan estratégico nacional con enfoque de soluciones duraderas.

En el año 2021, ante la realidad del DFI en nuestro país, la PDDH bajo su mandato de velar por el respeto y garantía a los derechos humanos, con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, implementó el primer Pilotaje de Monitoreo de Protección a Personas Víctimas de DFI, que, entre sus resultados, identificó la necesidad de crear e implementar para el año 2022 una Estrategia de Monitoreo de Protección a Personas Víctimas DFI, cuyos resultados han sido publicados y socializados con las instituciones del Estado, agencias de cooperación, municipalidades, líderes y lideresas comunitarias.

Los resultados de la Estrategia de Monitoreo de Protección (en adelante, la Estrategia de MP) generaron el interés de actores involucrados, quienes solicitaron a la PDDH la continuidad y divulgación de los resultados del monitoreo de protección, desarrollado en el año 2023 en los departamentos de San Miguel, San Vicente y Sonsonate.



## METODOLOGÍA.

La ejecución del Monitoreo de Protección a Personas Víctimas de DFI para el año 2023 fue un abordaje estratégico y progresivo que implicó la ejecución de cuatro fases de levantamiento de información, en las que se utilizaron técnicas y herramientas cualicuantitativas, como encuestas realizada a personas mayores de edad y entrevistas con actores locales, en el período comprendido entre febrero y octubre, realizándose en zonas rurales y urbanas; acompañado de un proceso de formación sobre DFI con los participantes en las comunidades. Posterior a ello, se realizó un taller de análisis de resultados con especialistas de protección de la PDDH y el equipo de monitoreo de protección, formando parte de las fuentes para la elaboración del Informe Anual del Monitoreo de Protección 2023.

La recolección y sistematización de la información, se realizó a través de la herramienta tecnológica KoBoToolbox, a partir de ello, se elaboró la representación gráfica de las estadísticas y el posterior análisis cualitativo.

Partiendo de la selección de tres departamentos, uno por cada zona de país (occidente, paracentral y oriental) al mismo tiempo se realizó un proceso de priorización de municipios, considerando los siguientes criterios: casos de DFI conocidos por la PDDH, hechos relacionados con vulneración de derechos, el trabajo presencial realizado por la institución y conocimiento del territorio, priorizando los siguientes municipios:

- ✓ San Miguel: Chirilagua, San Rafael Oriente y de San Miguel.
- ✓ San Vicente: San Sebastián, San Esteban Catarina y San Vicente.
- ✓ Sonsonate: Acajutla, Izalco y Sonsonate.

En los meses de enero y febrero 2023, el equipo técnico de monitoreo de protección realizó la actualización de los instrumentos para la recolección de la información, encuestas y entrevistas, con el propósito de ampliar las unidades de análisis para profundizar en la comprensión del fenómeno del DFI.

El proceso de ejecución de cada uno de los cuatro levantamientos realizados durante el año fue liderado por el equipo técnico de monitoreo de protección con el apoyo de las Delegaciones Departamentales y Departamento de Atención a Personas Desplazada y Personas Migrantes (DAPDM) de la PDDH.

Durante las fases de levantamiento de información, previo a la implementación de encuestas y entrevistas, se realizó un proceso de coordinación con alcaldías, instituciones y referentes comunitarios, a fin de contar con su apoyo y participación, lo cual facilitó el acceso a los territorios, para la implementación del monitoreo de protección.

## GENERALIDADES DEL MONITOREO DE PROTECCIÓN A DFI 2023.

En términos operativos, el monitoreo de protección, en la fase de obtención de información y verificación de datos, presenta cuatro acciones puntuales:

- ✓ 1,886 encuestas a población en general.
- ✓ 50 entrevistas con actores locales y líderes comunitarios.
- ✓ 47 jornadas de formación en DFI y derechos humanos en los territorios.
- ✓ Taller de Análisis de Resultados del Monitoreo de Protección 2023.

De las 1,886 encuestas realizadas, se presentan los siguientes datos generales.

Se realizaron 963 en el área rural y 923 en el área urbana.

### Encuestas por zona:



Área rural: 51%



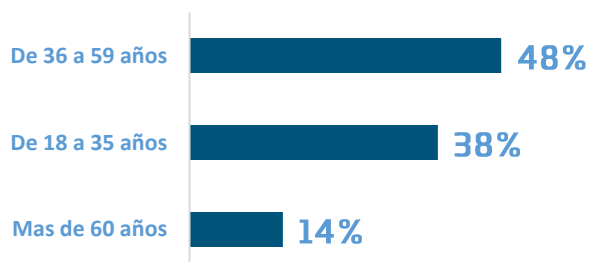
Área urbana: 49%

### Población encuestada y entrevistada por género.

Población encuestada.	Entrevistas con actores locales.
Femenino: 65%	Femenino: 58%
Masculino: 34%	Masculino: 42%
Otro género: 1%	

Para el levantamiento de información se definió como grupo meta a las personas mayores de 18 años, como resultado, el 48 % de los encuestados corresponde a personas entre 36 y 59 años, luego con 38 % de 18 a 35 años, un 14 % para las personas mayores de 60 años.

### Rango de edades de la población consultada.



## RESULTADOS DE MONITOREO DE PROTECCIÓN 2023.

### CARACTERIZACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN LA POBLACIÓN VÍCTIMA.

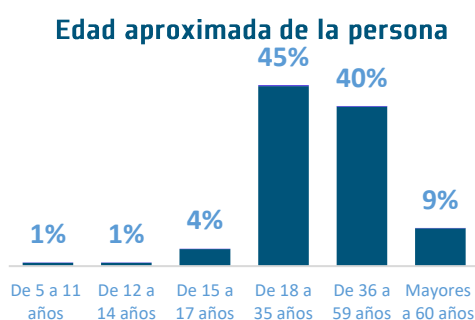
El desplazamiento forzado interno es un fenómeno complejo que puede afectar a individuos, familias o comunidades enteras, distorsionando sus entornos y poniendo en fragilidad sus proyectos de vida. Al caracterizar a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, se pueden considerar diferentes aspectos de análisis para elaborar una visualización más amplia de esta problemática.

En la consulta realizada a un total de 1,886 personas, se identificaron 254 casos compuestos por 926 víctimas de DFI, que representan el 14% de la población encuestada. De este grupo, 234 casos ya han sido desplazados y 20 en riesgo a desplazarse.

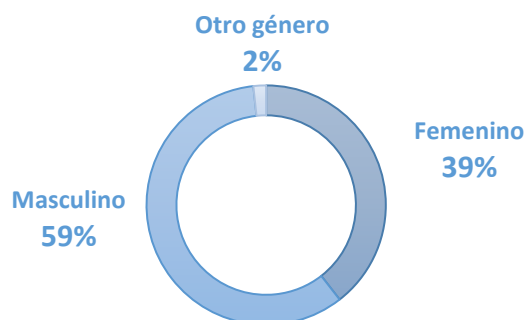
Para comprender la situación que viven las víctimas de desplazamiento, se requiere considerar diversos aspectos, por ejemplo, la edad nos permite comprender necesidades específicas y circunstancias de vulnerabilidad.

Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores requieren cuidados especiales y tienen necesidades diferentes en comparación con los adultos jóvenes.

De la población que recibió directamente el hecho de violencia que provocó el DFI.



**¿Cuál es el género de esta persona?**

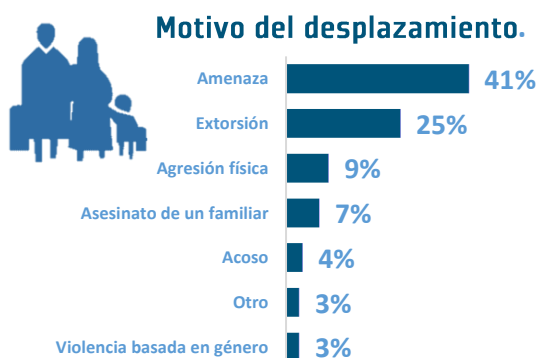


El género de la población víctima es importante, debido a que puede determinar roles, vulnerabilidades y desafíos específicos que enfrentan en su cotidianidad relacionados con violencia de género, acoso, estigmatización, así como desafíos de sostenibilidad de su medio de vida y acceso a oportunidades laborales.

## MOTIVO DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO.

En la realidad salvadoreña, los desplazamientos forzados pueden ser generados por múltiples causas, las principales identificadas en el monitoreo son: las amenazas 41%, la extorsión con 25%, la agresión física con 9%, asesinato de un familiar 7%, el acoso con 4%, violencia basada en género 3% y otros con un 3%. También el ser testigo de hecho de violencia con un 2%, reclutamiento forzado por pandillas 2%, agresión sexual 2% y con 1% cada uno: relación forzada y prefiero no decir.

Las causas identificadas, especialmente cuando no hay recursos de protección o apoyo adecuados para las víctimas, han generado que las personas y sus familias se vean obligadas a huir de sus hogares, generando así el desplazamiento forzado.



Aparecen con 2% cada uno: testigo de un hecho de violencia, reclutamiento forzado, agresión sexual y con 1% cada uno: relación forzada y prefiero no decir.

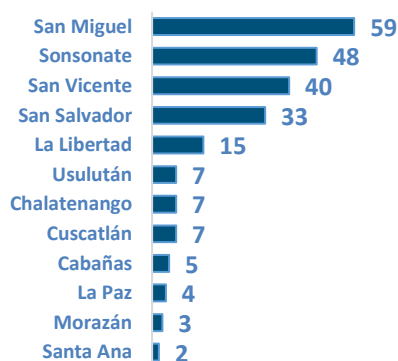
**El 79% de la población víctima de DFI no realizó denuncia a alguna autoridad competente.**

### ¿Por qué no hizo la denuncia?



De los casos de víctimas en condición de desplazamiento forzado, sobre la primera vez que se desplazó.

### ¿En dónde se encontraba la primera vez antes de desplazarse?



Aparecen con 1 cada uno: Ahuachapán y La Unión. En 2 prefirieron no decir.

### ¿Hacia qué lugar se dirigió cuando se desplazó de su hogar por primera vez?

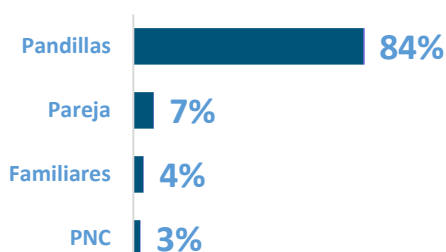


Aparecen también con frecuencia de 1: La Libertad, Ahuachapán, Usulután, Cabañas, Chalatenango y Morazán, y 5 prefirieron no decir.

Los actores de los hechos violencia que provocaron los desplazamientos forzados fueron: las pandillas 84%, la pareja sentimental 7% y familiares con un 4%, PNC 3% y 2% prefirió no especificar ningún actor.

Las víctimas experimentan miedo continuo a represalias por parte de estos actores, generando afectaciones emocionales, posibles traumas, especialmente, por la pérdida de un familiar, verse obligado a abandonar su hogar, el entorno comunitario y redes de apoyo.

### Actores de hechos de violencia ante el DFI.



Fuente: Encuesta a población víctima de DFI en el monitoreo de protección 2023.

En el mismo contexto, en los resultados de entrevistas a los actores locales, también identifican a las pandillas con 72%, particulares 11% familiares 8% y con 9% PNC y FAES.

Fuente: Entrevista con actores territoriales en el monitoreo de protección 2023.

### Afectaciones por tipo de actor que provocó el DFI según el análisis del taller de MP 2023.

**Por pandillas:** "Ser expulsados de sus redes comunitarias y de apoyo, la estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras, la pérdida de familiares, la desintegración de su núcleo familiar, el desarrollo de trastornos como la ansiedad y depresión ante el riesgo de persecución por la pandilla."

**Pareja sentimental:** "La desintegración familiar, la pérdida de fuente de ingreso, se observó que las mujeres no tienen un trabajo remunerado, dedicándose al cuidado del hogar, los hijos y familiares. La estigmatización y discriminación en las comunidades receptoras, hacia las mujeres jefas de hogar, el incremento de ser víctima de violencia sexual, física, lesiones o incluso feminicidio."

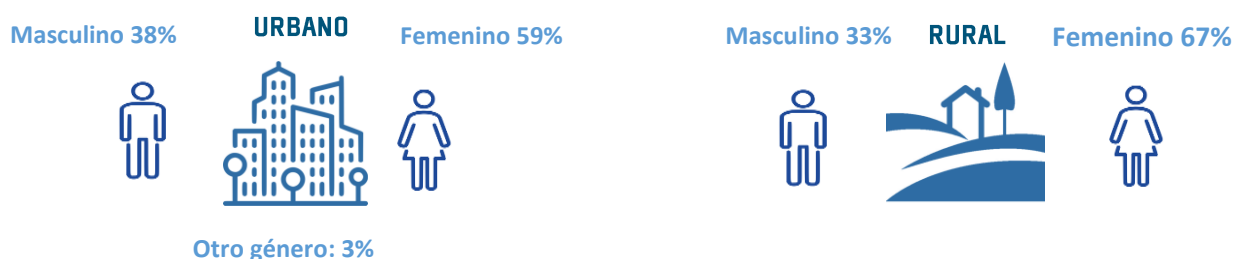
**Miembros de instituciones del Estado:** "Invisibiliza a las víctimas de DFI, incrementando el riesgo a ser víctima de afectaciones a su derecho a la seguridad personal, persecuciones e indagaciones ilegales y otras violaciones de derechos humanos."

Fuente: Taller de análisis de resultados del monitoreo de protección 2023.

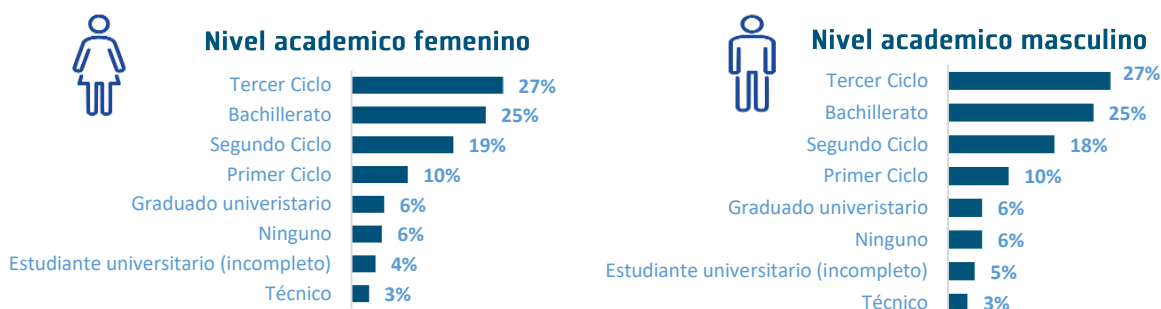
Las víctimas de desplazamiento forzado en relación con su entorno cotidiano; enfrentan desafíos diferenciados, por ejemplo, en el área rural se produce la pérdida de tierras, medios tradicionales de subsistencia, sentimiento de desarraigo basado en los estrechos lazos de unidad entre sus miembros; mientras que en lo urbano se presentan desafíos importantes como el acceso a una vivienda digna, al empleo y servicios básicos.

En ambos casos se identifican alteraciones de sus entornos habituales que pueden poner en riesgo su seguridad alimentaria, acceso a bienes y servicios básicos de consumo; agravando condiciones de pobreza preexistentes y creando nuevos desafíos para la supervivencia.

### Área de la población víctima.



El nivel educativo de las personas desplazadas es un factor que puede determinar el acceso a medios de subsistencia, oportunidades laborales, así como la capacidad de adaptación a nuevos desafíos ante el cambio de sus entornos, sumado a condiciones socioeconómicas previas. De la población víctima de DFI, el 6% no posee ningún nivel de estudio, el 29% aproximadamente ha alcanzado niveles educativos de primer y segundo ciclo y sólo 9% ha logrado culminar una carrera técnica o universitaria.



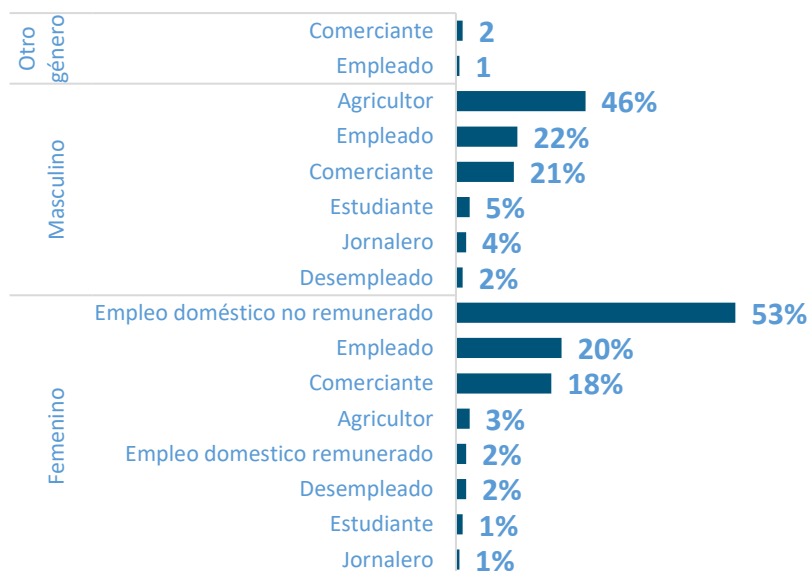


## Pérdida de medios de subsistencia.

Conocer la ocupación laboral previa de las personas desplazadas puede brindar una perspectiva de las afectaciones que sufren en su entorno; por tanto, permite comprender las habilidades y experiencias laborales que poseen.

El desplazamiento provoca que las personas pierdan sus recursos económicos debido al abandono obligado de sus empleos y el cambio de sectores económicos claves en sus áreas de origen. Al encontrarse en nuevas comunidades sufren discriminación, inadaptación de sus habilidades, capacidades productivas y dificultades en la búsqueda de un nuevo trabajo para la reconstrucción de sus actividades de subsistencia en sus nuevos entornos; lo cual limita el acceso a medios de subsistencia habituales y cambios en la dinámica social dentro de sus comunidades, que se vuelven condicionantes para satisfacer necesidades como la alimentación, acceso a servicios básicos y las condiciones mínimas necesarias para un desarrollo de vida digna.

### Ocupación por género



### Pérdida de medios de subsistencia.

El 31% de la población víctima de DFI expresa haber perdido su trabajo o medios de subsistencia.

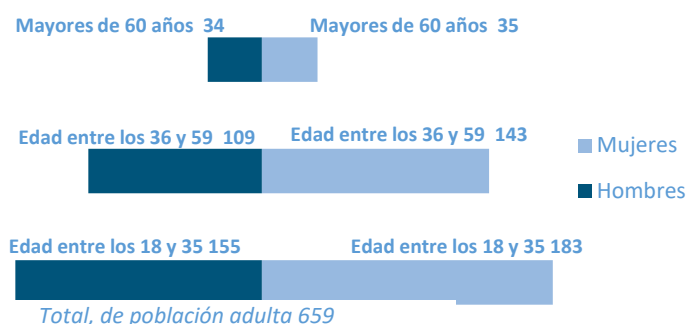
*De los casos de otro género, estos se distribuyeron por frecuencia siendo un total de estos 3 de la población.*

## CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO.

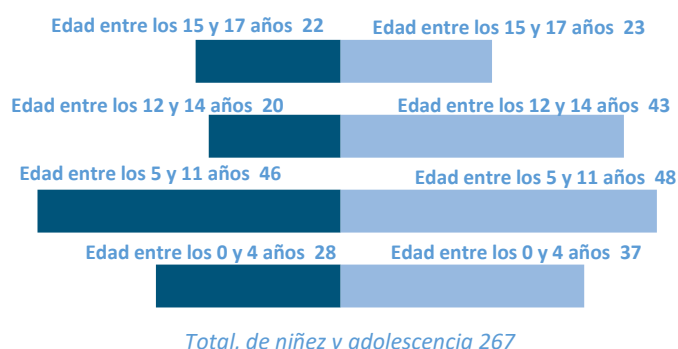
El desplazamiento forzado tiene impactos en la estructura familiar de sus víctimas, aspectos como: roles, situaciones socioeconómicas, acceso a servicios básicos y aspectos que pueden agravar su contexto de vulnerabilidad.

Rango etario de 926 personas que componen los núcleos familiares de los 254 casos de víctimas de DFI.

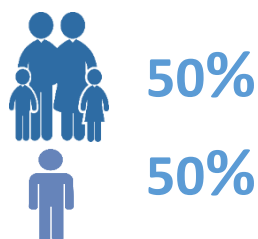
### Población adulta



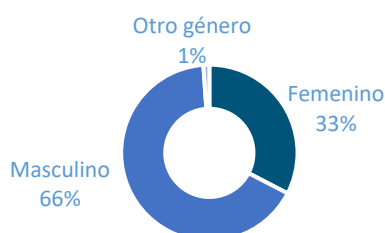
### Niñez y adolescencia



### Modalidades de DFI: Familiar e individual.



### Género de los jefes de hogar en los núcleos familiares.



De los 234 casos de víctimas en condición de DFI, de estos 27 casos han tenido que desplazarse en más de una ocasión.

El DFI impacta negativamente el proyecto de vida familiar en el 100% de los casos, por ejemplo, por la separación familiar, la inseguridad alimentaria, la pérdida o ruptura del patrimonio de las familias y el vínculo con sus redes de apoyo comunitarias. En los NNA, repercute en su salud mental, física, educación, interacción y socialización en su entorno; en las mujeres se identificaron afectaciones a su salud mental, física y sexual, redes de apoyo, en el desarrollo vocacional y laboral.

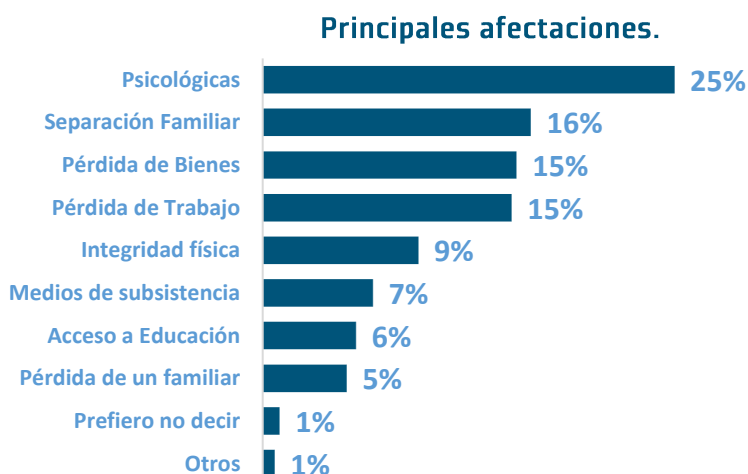
Fuente: Taller de análisis de resultados del monitoreo de protección 2023.

## AFECTIONS DENTRO DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES.

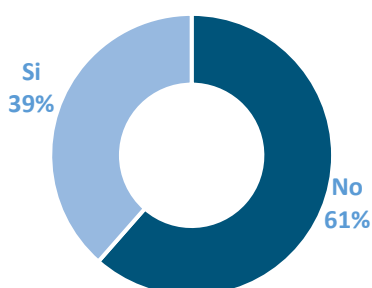
El desplazamiento forzado causa impactos significativos y variados en las víctimas en diversas áreas de sus vidas, debido a experiencias traumáticas, la incertidumbre sobre el futuro y el sufrimiento emocional. Entre las principales afectaciones identificadas, con 41% están las de tipo psicológicas y la separación familiar.

Así mismo, el 39% de los miembros de los núcleos familiares de las víctimas se quedaron en sus lugares de origen, lo cual, ha influido en el deterioro de sus estructuras, relaciones y entornos familiares; aunado a ello, la pérdida de bienes materiales les genera inestabilidad e inseguridad emocional y económica.

Existen diferentes tipos de afectaciones, en las que sobresale las psicológicas, identificándose las siguientes formas: el miedo constante con 31%, pérdida de sueño 25%, pérdida de apetito 14%, pesadillas 14%, revivir los hechos de manera constante 9%, aislarse 6% y otros 1%.



¿Algún miembro de su núcleo familiar se quedó en el lugar de donde salió?

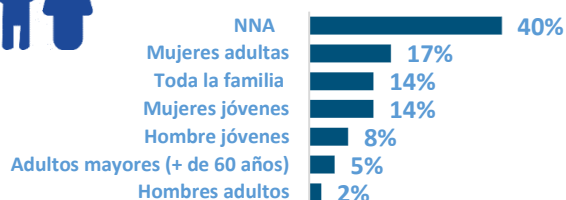


### ¿Por qué no le acompañaron?

El 43% por cuidar bienes personales, 19% por motivos económicos, 13% por que la amenaza era individual, 7% no sabe, 4% cada uno por: amenaza, prefiero no decir y por no verlo necesario, 3% por motivo de salud, con 2% motivos de trabajo, y 1% por estudio.

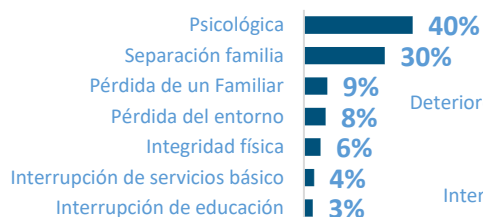


### Quiénes fueron los más afectados de su núcleo familiar?

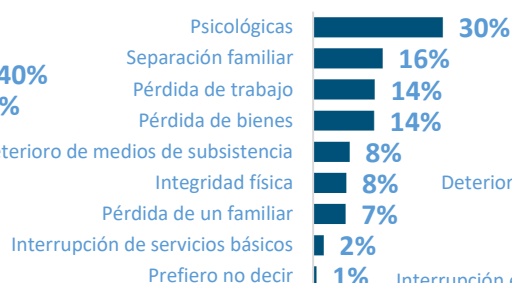


Es relevante destacar que los actores locales entrevistados identifican en las mujeres, niñez y adolescencia las afectaciones psicológicas y la separación familiar como las dos principales afectaciones, en comparación a los hombres que anteponen la pérdida de trabajo.

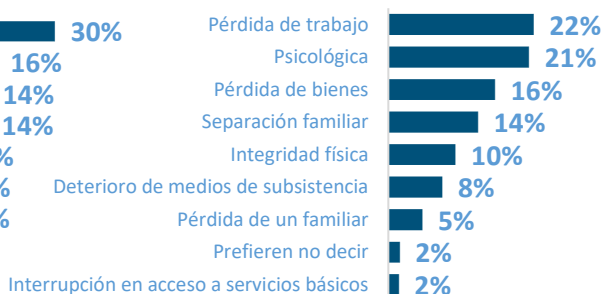
### Afectaciones en niñez y adolescencia.



### Afectaciones en mujeres.



### Afectaciones en hombres.



De acuerdo con los resultados del monitoreo de protección a víctimas DFI 2023, en cuanto a la caracterización de las personas víctimas, se identifica que la desintegración familiar es una de las principales consecuencias del desplazamiento, como se evidencia en la modalidad del tipo individual con un 50%; sumado a que, 39% de los miembros de los núcleos familiares se quedó en el lugar de origen.

De la población que sufrió el hecho de violencia que causó el DFI, el 85% tenía de 18 a 59 años, y el 59% eran hombres.

En los hechos de violencia que provocaron el DFI, con 75% se identificó a la amenaza, seguido de extorsión y agresión física; entre los actores de estos hechos están mayormente las pandillas, seguido de pareja y familiares. El 79% de las personas víctimas no han denunciado, de estos, el 98% no lo hizo debido a miedo a represalias, por la falta de confianza en las instituciones y por no saber a dónde acudir.

Las principales afectaciones en los núcleos familiares son de tipo psicológica y la separación familiar con el 41% y entre los más afectados por esta situación se encuentran que el 40% son niños, niñas y adolescentes, seguido de las mujeres jóvenes y adultas con 31%.

## ACCESO A DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO

### BARRERAS DE TIPO LEGAL

Desde el 23 de enero del año 2020 El Salvador cuenta con una Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno; el artículo 34 de dicha ley mandata al ejecutivo que en 90 días debía elaborar el Reglamento respectivo, situación que, a la fecha continúa sin cumplirse, identificándose por segundo año consecutivo en el monitoreo de protección. Lo que representa un desafío importante después de 4 años de la aprobación de la Ley, especialmente, porque limita su cumplimiento y en consecuencia la operativización por parte de las instituciones del Estado, para la atención de la población víctima tanto en la prevención, protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas.

Asimismo, la aplicación de las leyes antes los casos de DFI, se vuelve difícil para las autoridades competentes al recibir las denuncias, ya que, la tipología mediante la cual se podría perseguir dicho ilícito es descrita de forma amplia en lo dispuesto según el artículo 152-B Código Penal, que a su vez está sujeto a interpretación.

### BARRERAS DE RESPUESTA INSTITUCIONAL.

De acuerdo con la población consultada y actores entrevistados; no se identifica una respuesta adecuada para la atención a las víctimas de DFI.

Las principales redes de apoyo de la población afectada, con un 84%, han sido familiares y amistades cercanas, un 8% de organizaciones de la sociedad civil y un 8% instituciones estatales. Lo anterior evidencia la escasa respuesta y la falta de confianza en las instituciones que brindan apoyo a personas víctimas de DFI.

Un **92%** de la población expresó no haber recibido  
ningún tipo de apoyo de instituciones estatales.

Adicionalmente, se identificó que un 46% de los actores locales: conocen medianamente, poco o no conocen qué es el desplazamiento forzado interno y un 54% expresó conocer. Por otra parte, respecto al nivel de conocimiento sobre la Ley DFI, el 54% de los referentes institucionales no la conocen o únicamente la han escuchado mencionar y un 46% manifestó si conocerla.

Por otra parte, las instituciones con competencia de administración de justicia, al ser consultados sobre la aplicación de la Ley DFI, un 80% expresó no haberla aplicado, por los motivos siguientes: por desconocimiento 50%, 29% por no tener un reglamento, 14% por no haber sido capacitados y 7% por la falta de recursos.

A nivel territorial el 54% de los referentes institucionales expresan no contar con una ruta de atención o derivación ante casos de DFI.

Al consultar si cuenta con un presupuesto específico y personal capacitado para la atención de víctimas de DFI, el 88% de las instituciones y organizaciones expresan no contar con dichos recursos.

Al entrevistar a líderes y actores locales, el 84 % de los entrevistados manifestó brindar apoyo en los casos DFI, sin embargo, esta ayuda se enfoca limitadamente a las soluciones inmediatas tales como: alimentos, vestuario, atención médica y transporte, los cuales se proveen al momento del desplazamiento. Por otra parte, el 21 % de los entrevistados, indican que su aporte se limita a la de derivación de los casos, generalmente hacia organizaciones de sociedad civil e instituciones de carácter jurídico, que, si bien es una acción de apoyo, no se enfoca en la atención del caso concreto de DFI.

Por otro lado, en las atenciones identificadas a víctimas de DFI en los territorios, no se visualiza una atención con enfoque integral a la familia, en tal sentido, no se brinda una respuesta que garantice la aplicación de necesidad centrado en la persona, tal como se menciona en la Ley DFI.



## BARRERA DE ACCESO A DERECHOS.

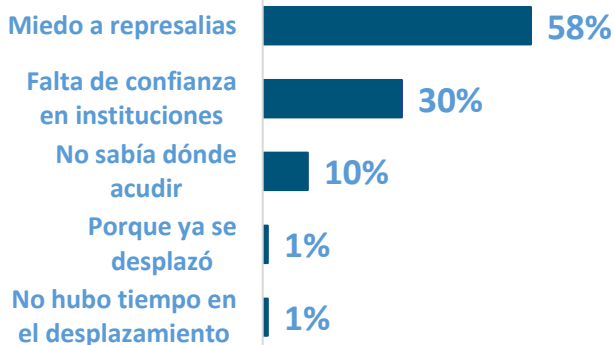
### DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA.

Con relación al informe del año anterior, los resultados de las encuestas afirman que la asistencia a las víctimas de DFI se ha visto limitada por parte de instituciones estatales para garantizar el principio de una pronta y cumplida justicia y el principio al debido proceso en el manejo y gestión de la mayoría de los casos de las personas víctimas de DFI. Al consultar sobre quienes le proporcionaron algún tipo de ayuda, las personas víctimas no identifican a las instituciones estatales, solo un 4% afirmó haber recibido ayuda por parte de la PNC.

El 79% de las personas víctimas no realizaron una denuncia ante ninguna institución del Estado, a consecuencia del miedo a represalias, falta de confianza en las instituciones y no saber a dónde acudir.

El **79%** de la población víctima de DFI no denuncia.

#### ¿Por qué no hizo la denuncia?



Resulta interesante conocer algunos aspectos que podrían estar íntimamente vinculados a las limitaciones en el acceso a la justicia. En primer lugar, existe desconocimiento y no aplicación eficiente de la ley de parte de las autoridades competentes; un 74% de los actores locales desconoce o sólo ha escuchado sobre la Ley DFI y un 80% expresan no haberla aplicado; mientras que un 46% de los actores manifestaron que sólo conocen medianamente, conocen poco o no conocen sobre el DFI y un 54% dicen conocer; disminuyendo así la posibilidad de que se pueda garantizar una protección integral en la gestión y derivación de casos de las personas víctimas de este fenómeno social.

Por otra parte, es importante destacar que durante el monitoreo se ha identificado que no se han garantizado algunos derechos elementales de las personas víctimas de DFI, específicamente, la salud, educación, vivienda, acceso a servicios básicos, trabajo y medios de vida.



### **Derecho a la salud.**

En cuanto, al acceso al derecho a la salud, 63 casos de personas víctimas han manifestado tener la necesidad de asistencia médica, 11 de estos no han tenido acceso a este servicio, por diferentes causas, entre ellas: por deficiencias en el sistema de salud, falta de medicamentos o por no tener a dónde acudir.



### **Derecho a la Educación.**

Respecto al derecho a la educación es importante mencionar que, de las personas que componen los núcleos familiares, 267 corresponde a niñez y adolescencia, esto equivale a un 29% del total de los miembros de los núcleos. En ese sentido, en 121 hogares víctimas de DFI hay niños/as, adolescentes en edades escolares (de 5 a 18 años). De este grupo el 58% expresó tener casi, poco o insuficientes recursos para que NNA asistan a los centros educativos. También, se identificó que en algunos casos los motivos de no asistencia se deben a la distancia de los centros educativos e inseguridad social.



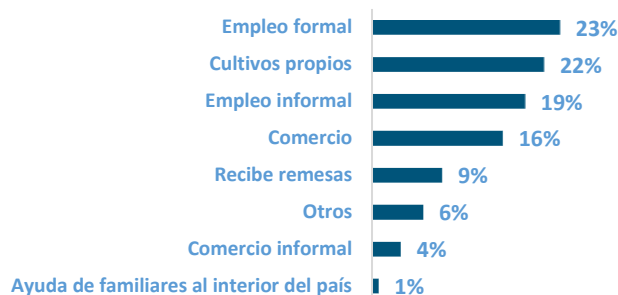
### **Derecho a la vivienda y servicios básicos.**

Un 37% de la población víctima expresó no contar con una vivienda propia, 16% afirman no tener acceso a agua potable, 6% dijo no contar con el servicio de energía eléctrica y 4% no poseer servicio sanitario en su hogar.

El 23% no tiene acceso a medios de comunicación (línea telefónica e internet).

### Derecho al trabajo y medios de subsistencia.

#### Trabajo o medio de subsistencia



El 31% de la población víctima de DFI afirman haber perdido su trabajo o medio de subsistencia por causas como DFI, discriminación, hechos de violencia, motivos de salud, jubilación forzada y contexto de régimen de excepción.

#### Actividades de subsistencia ante el DFI.

Un 24% de la población víctima de DFI, expresaron que para lograr subsistir junto con su familia incurrieron en algunas de las siguientes actividades:

- ✓ Reducción en la cantidad de comida.
- ✓ Apoyo familiar.
- ✓ Pedir prestado dinero para comprar alimentos.
- ✓ Limitó el consumo de comida.
- ✓ Reducir el gasto en artículos no esenciales.
- ✓ Usar el ahorro del hogar.
- ✓ Trabajar a cambio de comida.
- ✓ Vender propiedad u objeto de valor.



Un 7% de la población prefirió no responder.

Lo anterior indica que al no tener garantizados los derechos básicos como la salud, educación, vivienda, alimentación, protección, a vivir en familia, entre otros, afecta el desarrollo integral de las personas víctimas de DFI. Por lo tanto, las limitantes en cuanto a la garantía de derechos y acceso a servicios básicos exponen a las personas víctimas de DFI a mayores riesgos y niveles de vulnerabilidad, especialmente a la niñez, adolescencia y mujeres, puesto que según los datos estadísticos son las poblaciones mayormente afectadas.

## BARRERA POR TIPO DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

En el análisis de la población en condición de vulnerabilidad se identifican aspectos importantes a partir de características relacionadas con rangos etarios, género, discapacidad, área rural/urbana, nivel educativo, ocupación y oficio/medio de subsistencia, tipos y niveles de afectación por población.

Los datos recolectados de la población masculina víctima de desplazamiento indican que 28.5% se encuentran en edades económicamente activas (18 a 59 años), consideran que la principal afectación sufrida es la pérdida de trabajo, es decir se relaciona con los recursos económicos, teniendo que dejar en un segundo plano sus necesidades psicoemocionales y la integración familiar. Se puede establecer que, el no priorizar las afectaciones psicológicas y emocionales inmediatas y evolutivas, agudiza la incapacidad en la búsqueda de asistencia, aumentando así, las probabilidades del surgimiento de mayores afectaciones psicológicas.

Al analizar los niveles de afectación por núcleos familiares, se identifica que los más afectados en términos porcentuales ha sido las poblaciones de NNA con un 40% y las mujeres jóvenes y adultas con un 31%.

En cuanto a la población femenina víctimas de DFI, se identificó que las mujeres no están exentas de sufrir las repercusiones de hechos de violencia, ya que ellas mencionaron que los principales motivos que causaron los desplazamientos fueron las amenazas, agresiones físicas, acoso, violencia basada en género, agresión sexual, relación forzada y la desintegración familiar.

Con relación a la ocupación de dicha población, el 53% realizan trabajo doméstico no remunerado; en cuanto al nivel educativo con mayor porcentaje está en el tercer ciclo. Además, se identificó que, en los núcleos familiares de víctimas, un 33% del rol de jefatura de hogar es asumido por las mujeres, sumado a otros roles como de proveedoras, cuidadoras de niñez y población adulta mayor.

Por lo tanto, esto tiene una repercusión directa en su bienestar físico y psicoemocional, derechos sexuales y reproductivos, condicionando sus oportunidades de desarrollo personal, educativo, laboral, económico, social y cultural.

Dentro de la población víctima de hechos de violencia en el DFI, es preocupante que un 6% de éstos fueron dirigidos hacia NNA; en los núcleos familiares, el 40% de los más afectados son niñez y adolescencia. En esta población se identifica que las dos principales afectaciones son de tipo psicológicas y separación familiar. Aunado a ello, el DFI ha provocado la interrupción de sus procesos educativos, dentro de los hogares con NNA en edades escolares se identifican que, en 10 casos sólo algunos y en 4 ninguno de ellos asiste a la escuela; por motivos económicos, por distancia de los centros educativos, inseguridad social y otros.

La separación familiar por pérdida de un familiar o desplazamiento puede generar diversas implicaciones: deficiencia en el cuidado y atención directa y vínculo emocional, la pérdida de su entorno, el acceso a servicios básico. Los cambios ante sus ambientes cotidianos repercuten en afectaciones directas en el ejercicio progresivo de sus facultades.

Del total de población víctima, el 14% refiere que el DFI afectó al núcleo familiar completo. Además, el 7% de la población total de la población víctima son adultos mayores a 60 años.

Otros grupos poblacionales que, por sus características y condiciones específicas enfrentan factores de vulnerabilidad son las personas con enfermedades crónicas, personas sobrevivientes de violencia, población LGBTIQ+ (algunos expresan haber sido víctimas de discriminación por su orientación sexual), mujeres embarazadas, NNA no acompañados por sus padres, persona retornada y extranjera con necesidades de protección especial, personas con discapacidades psicológicas, física o motora, intelectual, sensorial y psicosocial.

Por otra parte, existe 39% de la población que, a pesar de haber sido víctimas de violencia generalizada, optaron por quedarse en sus hogares y comunidades de origen, quedando expuestas a mayores riesgos para su vida, integridad y bienes. Lo anterior, permite inferir que el hecho de no desplazarse no está vinculado a la ausencia de riesgos por violencia, sino a otros motivos, tales como cuidar bienes personales, económicos, de trabajo y apego a sus entornos.

En los núcleos familiares de las víctimas de DFI se identifican las afectaciones al desarrollo personal, social, cultural y económicas. Por otra parte, es importantes destacar que no se cuenta con una atención y protección integral orientadas a las necesidades y condiciones específicas de cada grupo poblacional con respecto a la asistencia humanitaria y soluciones duraderas.

## **LIMITANTES EN LA CAPACIDAD DE AFRONTAMIENTO DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DFI.**

La capacidad de afrontamiento en las personas víctimas de DFI, se ha visto limitada por múltiples factores, especialmente, la no denuncia, en donde se evidencia que, el 79% de las personas no denunciaron los hechos de violencia de los que fueron víctimas, siendo una constante en comparación al monitoreo 2022.

Es importante destacar que se presentan tres causales principales para no denunciar: el miedo a represalias, representado por un 58%; desconfianza en las instituciones representa el 30% y, en tercer lugar, se ubican aquellas personas que manifestaron que no sabían dónde acudir con el 10%.

Otro factor que influye en la capacidad de afrontamiento de las personas afectadas del DFI, es que un porcentaje considerable de las personas víctimas no logran reconocer que la situación de desplazamiento forzado es una condición que se adquiere de facto. Esto aumenta los niveles de riesgo, puesto que al no haber una identificación del fenómeno del DFI no existe la motivación para denunciar o buscar apoyo, especialmente, cuando existe 25%; de afectaciones psicológicas; 15% por separación familiar, pérdida de trabajo y de bienes en 15%, llevando a las personas a vivir experiencias traumáticas que afectan su desarrollo y crecimiento integral.

La generación inestable e insuficiente de recursos económicos también representa una limitación al momento de que las familias víctimas del DFI puedan asumir los costos de manutención y pago de servicios básicos de su núcleo familiar. Esto puede estar relacionado con los bajos niveles de escolaridad y con el hecho de que sólo el 23% de las personas desplazadas cuenta con un empleo formal.



El estar en un nuevo entorno, el desarraigo emocional de sus lugares de origen y la discriminación generan un impacto en el desarrollo de las actividades económicas habituales, las cuales se ven interrumpidas posterior al desplazamiento, por consiguiente, sus fuentes de ingreso pueden reducirse drásticamente, obligándolos a tomar medidas paliativas para poder subsistir, por ejemplo, reducir cantidad y tiempos de comida, buscar apoyo familiar, pedir dinero prestado, reducir gastos de los artículos no esenciales, usar sus ahorros, trabajar a cambio de comida y vender propiedades u objetos de valor, lo anterior pone en riesgo el derecho a un nivel de vida digna y la garantía de derechos básicos, además hace que sus procesos de adaptación se complejicen.

También es importante mencionar que, sobre el acceso a medios de comunicación (línea telefónica e internet) el 23% no tiene acceso a estos, lo cual, obstaculiza el acceso a servicios virtuales, desarrollo educativo, laboral y tecnológico de las personas en condición de DFI.

Todo lo antes descrito tiene un impacto directo en las personas víctimas y limita su capacidad para afrontar las afectaciones que surgen de su condición de desplazados. Las personas al no estar consciente de las implicaciones o afectaciones del DFI, ni contar con las herramientas y recursos necesarios experimentan inevitablemente un estancamiento en las principales áreas de desarrollo de sus proyectos de vida personal y familiar.

### DEBER DE GARANTÍA DEL ESTADO.

El Estado es constitucionalmente responsable de la garantía de seguridad y protección de los ciudadanos, para los casos de las personas en condición de DFI, esta responsabilidad se amplía, ya que además de las garantías generales, se deben integrar las relacionadas con el DFI, tales como: el reconocimiento de su condición de DFI, su derecho a retornar a lugar de origen o reubicación a otro lugar respetando su seguridad y dignidad, a no ser discriminado en el ejercicio de sus derechos, a ser tratados de manera digna y respetuosa, a una atención con la urgencia que el caso demande de parte de las autoridades, a la reunificación familiar, a la protección de sus datos personales, a una protección especial y atención prioritaria a la niñez y personas vulnerables, al acceso a derechos sociales, económicos y culturales.

La Ley DFI establece que el Ministerio de Justicia y Seguridad pública es la institución rectora y principal garante de los derechos de las personas desplazadas, para su atención en prevención, protección, asistencia humanitaria y soluciones duraderas; a través de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV), quien además es la responsable de articular lo diversos mecanismos y acciones de las instituciones involucradas, en la ejecución de la política nacional, la formulación de protocolos, planes de acción, la articulación y coordinación con instituciones para una atención integral.

Bajo esta perspectiva, el Estado debe crear e implementar desde el Órgano Ejecutivo y Legislativo, normativas, políticas públicas, programas y proyectos que garanticen de manera integral y diferenciada la atención a víctima de DFI. Por consiguiente, existen retos para asumir de forma integral la prevención, protección, ayuda humanitaria y soluciones duraderas.

“A pesar del reconocimiento del Estado de los DFI y el establecimiento de la Ley DFI, en términos de la prevención, protección ayuda humanitaria y soluciones duraderas, aún no ha asumido dichas obligaciones”.

*Fuente: Taller de análisis de resultados del monitoreo de protección 2023.*

En el marco de la información recopilada a través del monitoreo de protección 2023 y reafirmada en el taller de análisis de resultados, un problema que demanda mayor atención es la falta de información y difusión de la temática de DFI; el 46% de los entrevistados afirman conocer medianamente, poco o no conoce qué es el DFI. Desde la encuesta a población en general, se evidencia una mayor necesidad de información, ya que solo el 5% (81 personas de 1,886 encuestados) conocen sobre el DFI.

Por otra parte, el Estado deberá realizar acciones para impulsar y promover el fortalecimiento institucional en cuanto a los mecanismos de denuncia y la seguridad ciudadana.

A la fecha no se identifica la existencia de un sistema de registro único de personas víctimas de DFI; lo cual indica que en las instituciones no se cuentan con un mecanismo o proceso de registro ordenado y sistematizado de DFI. El 62% de los referentes institucionales afirman no llevar un registro oficial de casos de DFI.

Partiendo de los resultados identificados en el monitoreo de protección y de lo contemplado en la Ley DFI, corresponde al Estado asignar un presupuesto específico y acorde para la atención en prevención, asistencia humanitaria y protección e implementación de soluciones duraderas.

### **LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO DE PROTECCIÓN A PERSONAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO 2023.**

Como parte de la respuesta institucional de PDDH, a través de la Estrategia de Monitoreo de Protección a Personas Víctimas de DFI y ante los resultados identificados en el monitoreo de protección, se ha trabajado la temática del desplazamiento forzado desde 4 líneas de intervención:

- ✓ Monitoreo de Protección.
- ✓ Difusión y capacitación sobre DFI a nivel territorial.
- ✓ Participación en espacios interinstitucionales a nivel local.
- ✓ Fortalecimiento de capacidades en DFI a personal PDDH en los 3 departamentos.

Además, se ha trabajado en la difusión y capacitación sobre DFI y DDHH, desde los territorios, generando así incidencia a favor de las víctimas.

## Monitoreo de protección.

Se contó con una herramienta propia para la caracterización y análisis del fenómeno, para la recopilación de información y el acercamiento a los territorios desde la PDDH. Así, se logró elaborar el presente informe anual, que puede ser un insumo útil para la toma de decisiones a favor de las víctimas.



*Fotografía de levantamiento de encuesta con población en general.*

## Difusión y capacitación sobre DFI a nivel territorial.

Por medio de 47 jornadas territoriales en 9 municipios, en las que participaron 1,156 personas, se logró difundir y capacitar a la población sobre el desplazamiento forzado interno y sus derechos.

Además, con la implementación de la Estrategia de Monitoreo de Protección en los territorios, se logró mayor posicionamiento de la PDDH y la difusión de los canales de atención a las personas víctimas.



**PDDH El Salvador**  
@PDDHElSalvador

Dando seguimiento al trabajo de Monitoreo de Protección a Desplazamiento Forzado Interno, que realiza la [#ProcuradoraDDHH @RaqueldeGuevara](#), la Delegación [#PDDHSanVicente](#) desarrolló jornadas sobre este tema, en comunidades de San Esteban Catarina, San Sebastián y San Vicente.



3:56 p. m. · 18 may. 2023 · 650 Reproducciones

2 Retweets · 8 Me gusta

## Departamentos y municipios intervenidos en las jornadas de formación sobre DFI.

Dpto. Sonsonate	Dpto. San Vicente	Dpto. San Miguel
Acajutla	San Esteban Catarina	San Rafael Oriente
Izalco	San Sebastián	Chirilagua
Sonsonate	San Vicente	San Miguel

### Participación en espacios interinstitucionales a nivel local.

En representación de las delegaciones departamentales de la PDDH, se participó en 58 reuniones (CMPV o mesas temáticas) o actividades locales como ferias de derechos en los diferentes espacios interinstitucionales en los municipios de Acajutla, Izalco, San Vicente y San Miguel, lo que posibilitó divulgar los resultados del Monitoreo de Protección del 2022 y avances del Monitoreo 2023, además de promover y posicionar el enfoque de derechos a favor de las poblaciones víctima de DFI. También se realizaron cinco eventos, incluyendo uno en San Salvador, donde la Maestra Raquel Caballero de Guevara, Procuradora de los Derechos Humanos, socializó el Informe de Monitoreo de Protección 2022 con titulares o representantes de instituciones del Estado, agencias de cooperación y de organizaciones de sociedad civil.

De la misma manera, las Delegaciones Departamentales de Sonsonate, La Paz, San Vicente y San Miguel, presentaron los resultados del Informe de Monitoreo de Protección. Es importante mencionar que los resultados también fueron compartidos por la Señora Procuradora a nivel internacional en la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

Por otra parte, algunos espacios han permitido el acercamiento con los actores locales y las comunidades para el levantamiento de monitoreo.



*Fotografía de participación en espacios interinstitucionales del EMP.*



Se destaca lo expresado por las personas asistentes en los diferentes espacios de divulgación, quienes identificaron la relevancia que exista información producto de la consulta directa a las comunidades y de los actores locales, para conocer la actualidad del fenómeno del DFI, así como los hallazgos identificados y las recomendaciones realizadas a las instituciones competentes.



Por lo tanto, el actual Informe de Monitoreo de Protección, responde a lo solicitado por instituciones y actores locales en el año 2022, generando la expectativa de la socialización de los resultados del Monitoreo de Protección del año 2023.

### **Fortalecimiento de capacidades internas al personal de la PDDH en Delegaciones Departamentales.**

En seguimiento al fortalecimiento a las capacidades del personal técnico de las tres Delegaciones Departamentales de PDDH de Sonsonate, San Vicente y San Miguel, se realizaron seis jornadas de formación en las temáticas de DFI, monitoreo de protección y la Ley DFI.

### **OTROS HALLAZGOS.**

En el desarrollo del monitoreo de protección del año 2023, a través del acercamiento territorial, la implementación de encuestas a población, entrevistas a actores locales, procesos de formación comunitaria y la observación se ha logrado la recopilación de información importante. A partir del análisis de las expresiones propias de la población y de la correlación entre diferentes respuestas, hemos incluido en este informe, otros hallazgos relevantes, con el propósito de ampliar la comprensión o propuestas en el marco DFI:

- Existen personas y familias que a pesar de haber sido afectados por la violencia o no sentirse seguros en su lugar de residencia, han decidido no desplazarse, incluso sin importar el nivel de riesgo que representa para ellos.
- El fenómeno del desplazamiento forzado se invisibiliza por las instituciones administradoras de justicia, registrándose como cualquier otro hecho violatorio de derechos y determinándose a partir de sus causales.
- En algunas comunidades, los hechos de violencia no están siendo denunciados por miedo a represalias y desconfianza en las autoridades estatales locales o por efectos del régimen de excepción.
- Las víctimas de DFI, al no identificar una asistencia idónea dentro del país, ven como alternativa huir a otro país.
- Con relación a las afectaciones por el DFI, en los casos en donde se ha brindado algún tipo de atención, esta ha sido dirigida por lo general hacia las víctimas directas, escasamente a los familiares de las víctimas y en menor medida a niñez y juventud.



- A diferencia del monitoreo 2022, en donde los actores locales no tenían conocimiento de las rutas de atención a población víctima de DFI, este año, en algunos municipios sí lo hicieron. Estas rutas suelen estar a cargo de organizaciones de sociedad civil. No obstante, a la fecha aún no se identifica una ruta de atención nacional a víctimas de DFI por parte del ente rector en los territorios.
- Se identifica que proyectos de infraestructura de gran envergadura pueden generar desplazamientos forzados en los territorios cuando no se considera el impacto social negativo en los entornos.
- Existen otras causales dentro del desplazamiento forzados que históricamente no han sido visibilizados dentro de los motivos, entre los cuales están: La violencia basada en género, por desastre y cambio climático.
- Se debe considerar que, a mediano y largo plazo, la niñez y adolescencia víctimas de DFI presentarán afectaciones en su desarrollo psicosocial al no haber recibido una atención oportuna.
- La falta de atención oportuna en las afectaciones psicológicas y falta de un enfoque en soluciones duraderas propicia el desarrollo de traumas y trastornos en las personas víctimas.
- En las comunidades se identificó niñez y adolescencia que quedaron sin el cuidado directo, atención y protección de sus madres y padres a consecuencias de DFI y del régimen de excepción, por lo que este rol probablemente fue asumido por otro cuidador con otras capacidades y recursos limitados.

## CONCLUSIONES

- En dos años del monitoreo de protección, se ha identificado que el fenómeno del desplazamiento forzado interno es un problema que continúa afectando a la población salvadoreña en diferentes ámbitos.
- Entre los motivos que han provocado el desplazamiento forzado interno de familias, se identifica un aumento de la violencia basada en género y la violación de los derechos humanos en el contexto social actual.
- Las afectaciones psicológicas son las principales consecuencias del DFI en las víctimas, y se mantienen, a pesar del tiempo transcurrido desde su desplazamiento.
- A pesar de los hechos de violencia y múltiples afectaciones que enfrenten las personas en desplazamiento forzado interno, no se identifican a sí mismas como víctimas de este fenómeno.
- Un alto porcentaje de la población víctima de DFI expresó no haber recibido ayuda por parte de instituciones del Estado.
- Persiste en la población y actores locales una confusión en cuanto a la diferencia entre el desplazamiento forzado interno y la migración a otro país.
- Se mantiene la situación identificada en el monitoreo de protección 2022, en cuanto a la falta de asignación presupuestaria, específica en las instituciones del Estado para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado.
- Desde la publicación de la Ley de DFI en enero 2020, hasta el momento, no se ha elaborado y aprobado un reglamento que operativice o desarrolle las atribuciones de dicha ley.
- Se identifica la necesidad de una política pública sobre DFI que permita la implementación de lo dispuesto por la ley DFI. Su ausencia limita la atención adecuada y efectiva para las víctimas de DFI.
- La asistencia a las víctimas de DFI por parte de las instituciones se enfoca principalmente en la derivación de los casos a otras organizaciones o instituciones que brindan servicios de manera directa.
- No se identifica un modelo de intervención con enfoque de atención integral familiar y soluciones duraderas orientado a las necesidades y condiciones específicas de las víctimas.
- Se identifica ausencia de parte de las instituciones responsables en la asistencia a víctimas de DFI, lo cual se refleja en los niveles de atención desde los territorios.

- A pesar de que las víctimas de DFI han identificado la afectación de tipo psicológica con un mayor porcentaje, los resultados muestran una reducida atención en esa área.
- Un alto porcentaje de la población víctima de DFI no denuncia los hechos de violencia que provocaron su desplazamiento, por miedo a represalias, falta de confianza en las instituciones y no saber a dónde acudir.

## RECOMENDACIONES

En atención al deber de garantía del Estado Salvadoreño ante los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado interno se recomienda:

### A los Órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

- Establecer dentro del Presupuesto General de la Nación una partida presupuestaria que permita a las instituciones del Estado ejecutar acciones de prevención y atención a las víctimas de DFI, y que además garantice la sostenibilidad de los recursos.
- La creación y aprobación del Reglamento de La Ley Especial para Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno.
- Ante la actual falta de reglamento de la Ley DFI, establecer lineamientos o directrices inmediatas que orienten la respuesta del Estado desde diferentes instituciones.
- Elaboración, aprobación, ejecución y difusión inmediata de políticas públicas integrales dirigida a proteger, garantizar y restituir los derechos de las personas víctimas de DFI.
- Desarrollar estudios técnicos que evalúen y actualicen la información sobre el fenómeno del desplazamiento forzado interno en El Salvador.
- Crear una política de salud mental para la atención a víctimas de hechos de violencia.
- Realizar audiencias de seguimiento por Sala de lo Constitucional, para conocer el nivel de cumplimiento de la sentencia de Amparo 411-2017.
- Fortalecer el conocimiento de los jueces de paz, LEIV y familia integrando la Ley DFI para un acceso a la justicia de manera integral hacia las mujeres.
- Fortalecer el conocimiento de los jueces civiles sobre la restitución de derechos de vivienda, tierra y propiedad de las víctimas de DFI.

### **Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).**

- Activar el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, con el fin de articular a las instituciones públicas y privadas con responsabilidades en la garantía de los derechos de las personas desplazadas.
- Diseñar, coordinar e implementar una ruta de atención nacional para la protección de personas en condición de desplazamiento forzado interno, que permita a las instituciones correspondientes brindar asistencia desde sus competencias.
- Establecer procedimientos específicos en la identificación, registros sistematizados y otros indicadores previstos en la Ley DFI que permitan especificar las causales del desplazamiento y la caracterización de las víctimas.
- Elaborar y divulgar un plan integral para la atención diferenciada de la población víctima de DFI, en prevención, asistencia humanitaria y protección y reparación.
- Articular con MINSAL, programas para una atención psicológica especializada y sistematizada, contribuyendo a la reparación de daños.
- Que la comisión técnica interinstitucional para la atención y protección de las personas en condición de DFI, desarrollen campañas de información y sensibilización, así como diálogos, estudios e investigaciones sobre las causas e impacto del DFI.
- Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación en la atención a las personas víctimas por parte de las instituciones del Estado.
- Reactivar las oficinas locales de atención a víctimas (OLAV) a nivel departamental y supervisar su debida actuación en atención a la población víctima de DFI a nivel nacional.
- Crear un sistema nacional de albergues con las condiciones y recursos necesarios, para la atención adecuada para la población víctima de DFI.

### **A la Policía Nacional Civil.**

- Garantizar los derechos de la población ante hechos de violencia desde su accionar en los territorios, en el cumplimiento de sus funciones apegado a la ley.
- Realizar acciones en los territorios, que permita desde un enfoque de derecho humanos, la prevención y protección de personas víctimas de DFI.

### **A la Fiscalía General de la República y Procuraduría General de la República.**

- Promover el conocimiento y aplicación de La Ley Especial para Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno y toda la normativa que se aplica en la garantía del acceso a una justicia pronta y oportuna a la población víctima de DFI.
- Socializar en los espacios interinstitucionales a nivel local y en los territorios los servicios de atención existentes de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de la PGR, para la población víctimas de DFI.
- Acercar los servicios de atención a personas víctimas de DFI a las comunidades por medio de la Unidad de Desplazamiento forzado Interno de la PGR.

### **Al CONAPINA e Instituto CRECER JUNTOS.**

- Diseñar, adaptar o activar mecanismos y protocolos de protección especializados para la atención integral a la primera infancia, niñez, adolescencia y sus redes de apoyo familiar en condición o en riesgo de desplazamiento forzado interno.
- Coordinar esfuerzos a través de la Red de Entidades de Atención para la creación de protocolos de gestión y derivación de casos NNA en riesgo y/o condición de DFI, para brindar respuestas basadas en su interés superior.
- Monitorear y supervisar la labor que realizan las instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil en relación con la protección y garantía de derechos de la NNA en condición de DFI.

#### **Al Ministerio de Trabajo, INCAF y CONAMYPE.**

- Promover y difundir oportunidades de trabajo, formaciones en nuevas competencias laborales y financiamiento de iniciativas de negocios que responda a necesidades y habilidades específicas para las víctimas de DFI.
- Vigilar el cumplimiento de la estabilidad laboral de las personas que a consecuencia del DFI, deban ausentarse de su trabajo o trasladarse a un nuevo lugar de residencia.

#### **MINEDUCYT.**

- Crear modalidades y metodologías de estudio flexibles a la población estudiantil en todos sus niveles, que se adapten a sus necesidades individuales debido a su condición de desplazamiento forzado, de manera que sus procesos educativos no se vean interrumpidos.
- Incorporar e implementar en sus programas formativos contenido sobre derechos humanos y desplazamiento forzado interno, buscando reducción de la discriminación y revictimización.

#### **Ministerio de Salud.**

- Crear, adaptar y facilitar los servicios médicos especializados curativos y preventivos dirigidos a las personas que por su condición de DFI se le haya dificultado o restringido el acceso a este derecho.
- Facilitar mecanismos que permitan el acceso al personal médico, los informes de salud de las víctimas de DFI, garantizando que su actual ubicación no se vuelva una limitante.
- Ampliar los servicios de salud mental, de forma sostenida a nivel nacional priorizando los puntos de atención más próximos para la población.



#### **Alcaldías municipales.**

- Promover y facilitar la articulación de los espacios a nivel territorial con los actores locales para la atención a favor de la población víctima de DFI.
- Elaborar rutas de atención para la población víctima de DFI.
- Formación sobre la temática y Ley DFI al personal de las áreas o unidades de prevención y atención a personas en condición de vulnerabilidad.

#### **Al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).**

- Promover y supervisar la inclusión y seguimiento a la aplicación del enfoque de género en las respuestas de las instituciones del Estado hacia la población víctima de DFI.
- Diseñar, adaptar o activar mecanismos y protocolos de protección especializados para la atención integral de la mujer y su núcleo familiar en condición o en riesgo de desplazamiento forzado interno.

#### **AL MJSP, PNC, PGR, FGR, CONAPINA, MTPS, MINSAL, MINEDUCYT E ISDEMU.**

- Implementar programas de formación y sensibilización a todo el personal sobre la temática de desplazamiento interno y Ley DFI, a fin de que puedan brindar una asistencia idónea desde sus competencias a las víctimas de desplazamiento.
- Realizar un registro específico en la identificación de los casos de víctimas DFI, desde sus competencias, para visibilizar el fenómeno, caracterizar a las víctimas, para atención o derivación de los casos.

**EL 92% DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DFI,  
NO RECIBIÓ AYUDA POR PARTE DE  
INSTITUCIONES DEL ESTADO**

### **Organizaciones no gubernamentales.**

- Incluir dentro de sus estrategias, programas y proyectos, la atención a población víctima de DFI.
- Priorizar o crear partidas de fondos de emergencia para la atención de población víctima de DFI.
- Trabajar en coordinación con las instituciones del Estado, con otras organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales en asistencia a la población víctima de DFI.
- Promover y divulgar en la población víctima de DFI, la activación de los mecanismos de protección de las instituciones estatales garantes de sus derechos.

## CREDITOS Y AGRADECIMIENTOS

Elaborado por:

Lic. José Héctor Manuel Santos Guzmán

**Tec. Monitoreo de Protección, Delegación PDDH Sonsonate.**

Lic. Edgar Alexis Ramírez Martínez.

**Tec. Monitoreo de Protección, Delegación PDDH San Vicente.**

Lic. Ángel Alejandro Funes Serrano.

**Tec. Monitoreo de Protección, Delegación PDDH San Miguel.**

Ing. José René Chorro García.

**Coordinador Monitoreo de Protección, DAPDM PDDH San Salvador.**

Revisado por:

Licda. Ana Ruth Lara.

**Procuradora Adjunta para la Defensa de Persona Migrante y Seguridad Ciudadana.**

Lic. William Ernesto Espino Gaitán.

**Jefe del Departamento de Atención a Personas Desplazadas y Personas Migrantes.**

Validado por:

Maestra Raquel Caballero de Guevara.

**Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos.**

Licda. Ana Ruth Lara.

**Procuradora Adjunta para la Defensa de Persona Migrante y Seguridad Ciudadana.**

Agradecimientos:

**Delegadas Departamentales:**

**Sonsonate:** Licda. Karen Raquel Jiménez de Rodríguez.

**San Miguel:** Licda. Gladis Edubina Benítez.

**San Vicente:** Licda. Sandra Verónica Bautista Ramírez.

A personas designadas como puntos focales de las Delegaciones Departamentales de la PDDH, que participaron en el proceso de Monitoreo 2023 y a las diferentes áreas, departamentos y adjuntas especializadas de la PDDH que participaron en el taller de análisis de resultados.

## ANEXOS

### ANEXO 1. Instituciones consultadas en el ejercicio del monitoreo de protección a personas víctimas de DFI, 2023

REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES Y COMUNITARIOS CONSULTADOS.
<i>INSTITUCIÓN</i>
ALCALDIA MUNICIPAL
CONAPINA
FGR
GOBERNACIÓN
ISDEMU/CIUDAD MUJER
ISSS
LIDER COMUNITARIO
MINEDUCYT
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
MINSAL
ONG
PDDH
PGR
PNC
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL



## **PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de las Personas  
Migrantes y Seguridad Ciudadana**

**Teléfono: 2520-4350**

**Correos:**

**[adjuntamigrantesyseguridad@pddh.gob.sv](mailto:adjuntamigrantesyseguridad@pddh.gob.sv)**

**[adjuntamigrantesyseguridad@gmail.com](mailto:adjuntamigrantesyseguridad@gmail.com)**

## **PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS**

**5ª Avenida Norte y 19 Calle Poniente, N° 12, Polígono W, Urbanización  
Guadalupe, Centro de Gobierno, San Salvador.**

**Teléfonos: 2520-4300; 2520-4301; y 2520-4302**

